

Educación Inclusiva

El derecho a la Educación Inclusiva

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LAS FAMILIAS



Asociación por los Derechos Civiles
Noviembre 2015

Educación inclusiva en Argentina. Manual para el respeto del derecho a la educación de los alumnos con discapacidad

Buenos Aires: Asociación por los Derechos Civiles, 2015.

Diseño y diagramación: Alejandro Jobad

La elaboración de este trabajo fue posible gracias al apoyo de Open Society Foundations.

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-Sin Derivadas 3.0 Unported.

Para ver una copia de esta licencia, visita <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se ha procurado evitar el lenguaje sexista. Sin embargo, a fin de facilitar la lectura, no se incluyen recursos como la @ y se trató de limitar el uso de barras "as/os".

Desde la Asociación por los Derechos Civiles trabajamos para promover el pleno cumplimiento por parte del Estado argentino de su obligación internacional de respetar, promover y garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva.

Asociación por los Derechos Civiles
Av. Córdoba 795 - Piso 8 - (C1054AAG) Buenos Aires, Argentina
Tel (5411) 5236.0555 - E-mail: adc@adc.org.ar



Indice

■	Palabras Preliminares	5
■	Acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)	9
■	La CDPD en Argentina	13
■	El derecho a la educación inclusiva en la CDPD	15
■	Enfoques sobre la educación de las personas con discapacidad a lo largo de la historia: de la exclusión educativa a la educación inclusiva	19
■	Marco jurídico y políticas públicas en materia de educación de las personas con discapacidad en Argentina	25
■	El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su evaluación del cumplimiento por parte del Estado argentino de su obligación de garantizar el derecho a la educación inclusiva	33
■	Obligaciones de las escuelas comunes	37
■	Algunos materiales para seguir leyendo	44
■	Datos útiles	45
■	Anexo	47





Palabras Preliminares

Poner en acción un verdadero sistema de educación inclusiva requiere movimientos en tres dimensiones: políticas, culturas y prácticas*. Sin lugar a dudas, las familias son un espacio privilegiado para la creación de una **cultura** que ya no solo respete, sino que valore la diversidad.

En relación con las **prácticas**, tantos años de segregación educativa de personas con discapacidad o –en el mejor de los casos- de acciones “integradoras”, nos han llevado a naturalizar cantidad de prácticas que deben ser modificadas.

Este Manual para Familias tiene efectos en ambas esferas: brinda información para que cada familia pueda ser un motor generador de una cultura más inclusiva y, a la vez, cuente con elementos que le permitan detectar esas prácticas que deben ser cambiadas para que todos/as y cada uno/a de los y las estudiantes puedan acceder a la escuela y participar en ella con igualdad de oportunidades.

Pero es en el terreno de las **políticas públicas** donde creemos que este Manual tendrá mayor incidencia. Porque es imprescindible que las familias conozcan efectivamente sus derechos y tengan la información necesaria para lograr su respeto. De ese modo -además de contar con los recursos para asumir la responsabilidad en las acciones educativas que el art. 6 de la Ley Nacional de Educación les reconoce como “agentes naturales y primarios” de la educación-, toda política pública o práctica institucional que pretenda desconocer el derecho a la educación inclusiva que hoy tiene jerarquía constitucional, se encontrará con familias informadas, conocedoras de sus derechos y con recursos para hacerlos valer.

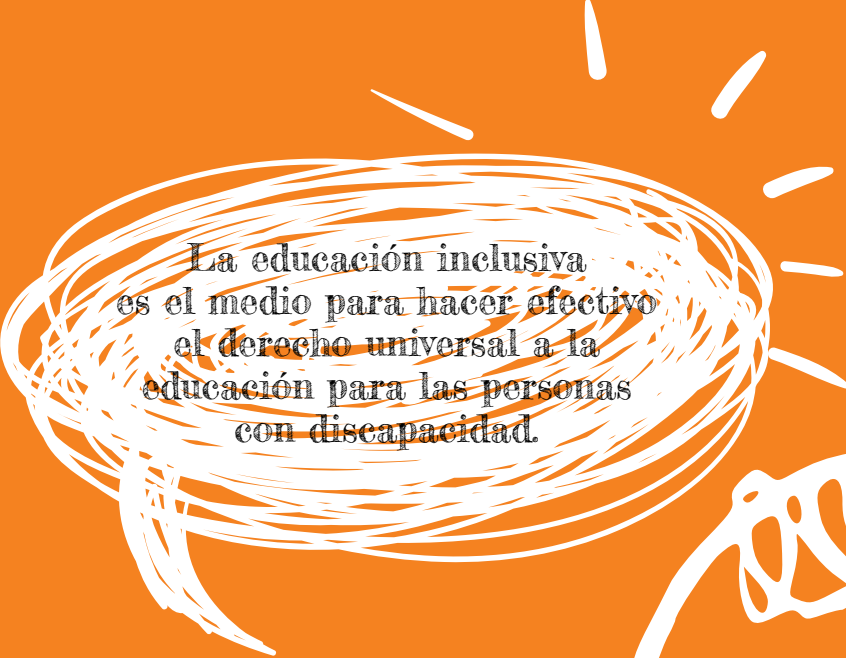
* T. Booth, M. Ainscow, K. Black-Hawkins, M. Vaughan, L. Shaw; *Índice de Inclusión*; Ed: CSIE-2000.

El **Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva**, del cual ADC forma parte, está conformado hoy por más de 130 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, de y para personas con discapacidad, de derechos humanos y de promoción social. Tiene como uno de sus objetivos incidir en las políticas públicas necesarias para el **efectivo respeto del derecho a la educación inclusiva**, reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional en nuestro país desde el año 2014.

Es en cumplimiento de ese objetivo, y con la convicción de que ciudadanos/as informados/as y conocedores/as de sus derechos son la base de cualquier acción política respetuosa de los derechos humanos, que nos sumamos a este Manual para Familias elaborado por la ADC. Pues al informar a los titulares mismos de los derechos cuyo respeto exigimos a las políticas públicas, hace un aporte fundamental para ese trabajo de incidencia que nos hemos propuesto desde el Grupo.

Y no sólo nos sumamos. También lo agradecemos. Porque en el “mientras tanto” que existe en el camino hacia normativa clara en materia de educación, acorde con la CDPD –dado que incluso la Ley de Educación Nacional N° 26.206 requiere ser adecuada a dicha Convención-, es preciso que todos/as conozcamos cómo hacer cumplir este derecho fundamental a la educación inclusiva para que nadie quede fuera de la escuela que le corresponde por derecho. De la **única escuela posible** si pensamos en escuelas constructoras de ciudadanía y de una sociedad con más equidad. De la escuela donde todos/as, significa: todos/as!

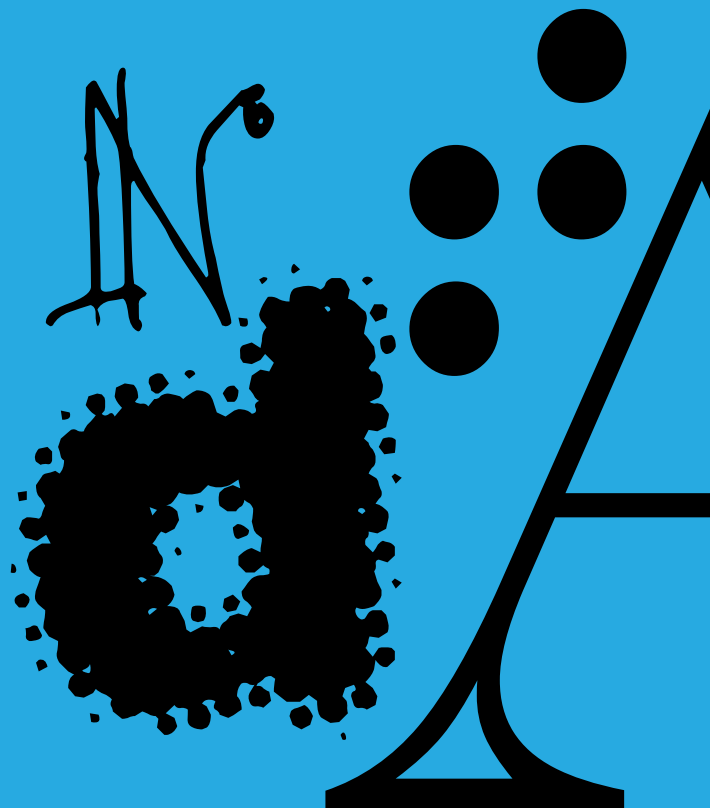
Gabriela Santuccione
Coordinación Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva



La educación inclusiva
es el medio para hacer efectivo
el derecho universal a la
educación para las personas
con discapacidad.



Educación
inCLUsiva



Acercas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)

¿Cuándo fue aprobada la CDPD?

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006. De esta manera, la CDPD es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI.

¿Cuántos países han ratificado la CDPD?

La CDPD ha sido ratificada por 150 países.

¿Cuál es la finalidad de la CDPD?

De acuerdo al artículo 1 de la CDPD, el propósito de la Convención “es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”

¿Cómo es definido el término “discapacidad” en la CDPD?

De acuerdo al inciso e) del Preámbulo de la CDPD, los Estados reconocen que “[l]a discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

El artículo 1 de la CDPD dispone que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”



Como surge de ambas disposiciones, la discapacidad es “un concepto cultural, que varía en diferentes culturas y sociedades”³. Además, estas disposiciones receptan la idea de que la discapacidad no está configurada exclusivamente por un “déficit percibido” de la persona. Por el contrario, es el resultado de la interacción entre el “déficit percibido” de la persona y las barreras actitudinales y sociales que impiden su plena inclusión en la comunidad en la que vive.

Asimismo, es importante destacar que la definición de “persona con discapacidad” del artículo 1 de la CDPD no es cerrada, sino que incluye, como mínimo, a aquellas personas “que tengan déficits físicos, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”⁴; “lo que no significa que excluya a otras situaciones o personas que puedan estar protegidas por las legislaciones internas de los Estados”⁵.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la CDPD?

El artículo 3 de la CDPD establece que “[l]os principios de [la] Convención serán:

- a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
- b) La no discriminación;
- c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
- d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
- e) La igualdad de oportunidades;
- f) La accesibilidad;
- g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
- h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”.

Cuatro modelos, cuatro paradigmas de la discapacidad

Tal como señala Magdalena Orlando “[l]a discapacidad ha sido percibida y valorada de diferente manera, en diferentes periodos históricos”⁶. Esta diversidad de concepciones se ve reflejada en cuatro modelos o paradigmas de discapacidad: el modelo de la prescindencia, el modelo médico o rehabilitador, el modelo social y el modelo de derechos humanos. En este cuadro, presentamos una breve descripción de los cuatro modelos:

3. Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Ediciones Cinca, Madrid, Octubre de 2008. [“El modelo social de discapacidad”]. Página 323.
4. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 1.
5. Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad”. Página 349.
6. Orlando, Magdalena. “Una mirada complementaria de la educación inclusiva en Argentina”. 2013. Disponible en <http://bit.ly/1Act6kb>. Página 5.

Modelo

Características principales del modelo

De la preescendencia

“En primer lugar entonces, se asume que las causas que dan origen a la discapacidad son religiosas: un castigo de los dioses por un pecado cometido generalmente por los padres de la persona con discapacidad, o una advertencia de los dioses acerca de que la alianza se encuentra rota y que se avecina una catástrofe. En cuanto al segundo presupuesto, se parte de la idea de que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, que es un ser improductivo y además una carga que deberá ser arrastrada, ya sea por los padres o por la misma comunidad”⁷.

Médico o rehabilitador

“En primer lugar, las causas que se alegan para justificar la discapacidad ya no son religiosas, sino que pasan a ser científicas. En este modelo (...) se alude a la diversidad funcional en términos de salud o enfermedad. En segundo lugar, las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles respecto de las necesidades de la comunidad, sino que ahora se entiende que pueden tener algo que aportar, aunque (...) ello en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas”⁸.

Social

“En primer lugar, se alega que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino sociales o al menos, preponderantemente sociales. Según los defensores de este modelo, no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad, para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. En cuanto al segundo presupuesto —que se refiere a la utilidad para la comunidad— se considera que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma medida que el resto de personas —sin discapacidad”⁹.

“Así, si se considera que las causas que originan la discapacidad son sociales, las soluciones no deben apuntarse individualmente a la persona afectada, sino más bien que deben encontrarse dirigidas hacia la sociedad. De este modo, (...) el modelo bajo análisis aboga por (...) una sociedad, pensada y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas”¹⁰.

De Derechos Humanos

Refleja una “mirada diferente hacia la persona con discapacidad, centrada en primer término en su condición de ser humano en igualdad de derechos y dignidad que los demás y, en segundo lugar, en una condición (la discapacidad) que le acompaña, y que requiere en determinadas circunstancias de medidas específicas para garantizar el goce y ejercicio de los derechos, en igualdad de condiciones que el resto de personas”¹¹.

Tal como señala Palacios, desde el inicio de los debates que dieron lugar a la aprobación de la CDPD, quienes estuvieron involucrados acordaron que “el modelo filosófico que se pretendería reflejar en la Convención asumiría un modelo social de discapacidad, desde la consideración del fenómeno como una cuestión de derechos humanos”¹². Así, la aprobación de la CDPD determinó la consolidación del Modelo de Derechos Humanos.

7. Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad”. Página 37.

8. *Ibidem*. Página 66.

9. *Ibidem*. Página 103.

10. *Ibidem*. Página 104.

11. *Ibidem*. Página 23.

12. Palacios y Bariffi. “La discapacidad como una cuestión de derechos humanos”. Página 65.

ñ c
ñ c

La CDPD en Argentina

El Estado argentino ¿ratificó la CDPD?

Sí. El 8 de junio de 2008, el Estado argentino promulgó la Ley 26.378 a través de la cual aprobó la CDPD. Asimismo, en diciembre de 2014, el Congreso de la Nación le confirió jerarquía constitucional a la CDPD (Ley 27.044).

La CDPD ¿es de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino y las provincias?

Sí. De acuerdo al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, la CDPD tiene jerarquía constitucional. Por ende, los derechos que la CDPD reconoce son complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional. En la práctica, esto significa que ninguna ley nacional o provincial y ningún decreto, resolución o disposición de las autoridades nacionales, provinciales y municipales puede desconocer o dejar sin efecto ninguno de los derechos reconocidos en la CDPD.

Las autoridades de una provincia o un municipio ¿pueden alegar válidamente que no están obligadas a cumplir las obligaciones impuestas en la CDPD?

No, en ningún caso, sin excepción. De acuerdo al artículo 4 inciso 5 de la CDPD, las disposiciones de la CDPD “se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.”

¿Qué órgano supervisa el cumplimiento por parte del Estado argentino de las obligaciones impuestas por la CDPD?

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el “órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención”¹³.

De acuerdo al artículo 35 de la CDPD, los Estados Partes deben presentar “un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que se trate. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.”

13. Información disponible en <http://bit.ly/1x9PeGu>



RI
A

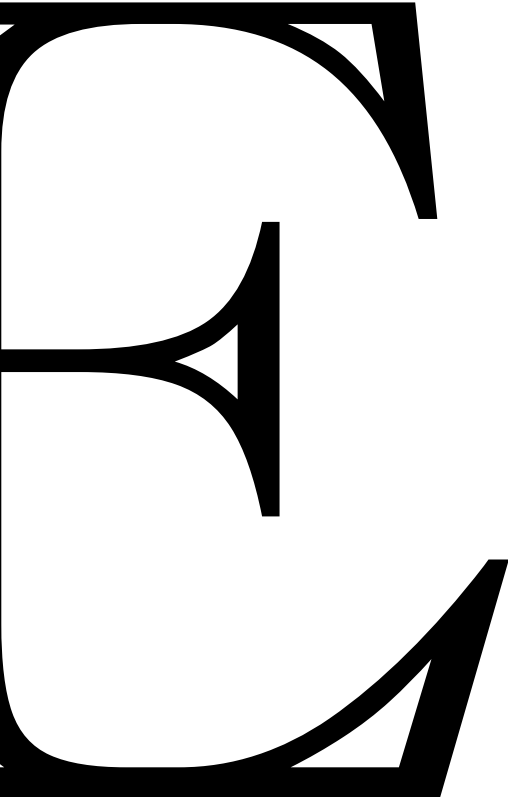
El derecho a la Educación Inclusiva en la CDPD

¿Qué disposiciones de la CDPD reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva?

El artículo 24 de la CDPD dispone:

- “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
 - a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
 - b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
 - c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
 - a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
 - b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
 - c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
 - d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;



- e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
 - a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
 - b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;
 - c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
 5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.”

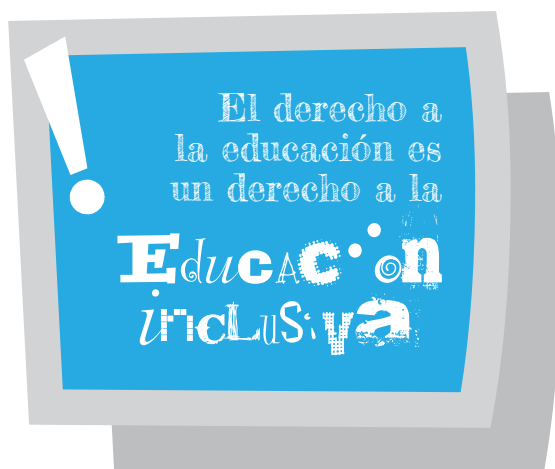
Asimismo, “[e]l artículo 24 está relacionado con los demás artículos de la Convención, de los que también depende, y debe leerse teniendo en cuenta los principios generales enunciados en el artículo 3. El artículo 24 debe leerse junto con el artículo 19 (derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad), ya que el requisito de un sistema educativo inclusivo es también una condición necesaria para la plena inclusión y la participación en la comunidad y para evitar el aislamiento o separación de las personas con discapacidad”¹⁴.

14. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [en adelante, “Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación”]. A/HRC/25/29. 18 de diciembre de 2013. Párrafo 18.

El derecho a la educación inclusiva ¿es un nuevo derecho consagrado por primera vez en la CDPD?

No. La CDPD “no establece un nuevo derecho, sino que aclara las implicaciones específicas del disfrute por las personas con discapacidad del derecho a la educación ‘sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades’”¹⁵. Así, “[e]n el artículo 24 de la Convención se reafirma el derecho de las personas con discapacidad a la educación y se señala que **la educación inclusiva es el medio de hacer efectivo el derecho universal a la educación para las personas con discapacidad**”¹⁶.

La Oficina del Alto Comisionado enfatizó, además, que “[e]l derecho a la educación es un derecho universal reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos y, como tal, se aplica a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. (...) En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se señala que, para que estas personas puedan ejercer ese derecho, han de existir sistemas educativos inclusivos; en consecuencia, **el derecho a la educación es un derecho a la educación inclusiva**”¹⁷.



15. Ibídem.

16. Ibídem.

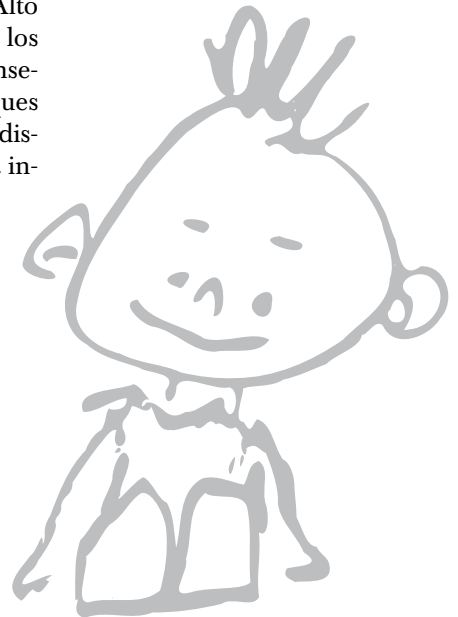
17. Ibídem. Parágrafo 3.

z d T I

Enfoques sobre la educación de las personas con discapacidad a lo largo de la historia: de la exclusión educativa a la Educación Inclusiva

El derecho a la educación inclusiva ¿encierra un nuevo enfoque en materia de educación de las personas con discapacidad?

Sí. Tal como ha señalado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “los sistemas de enseñanza han adoptado uno de los tres enfoques siguientes con respecto a las personas con discapacidad: la exclusión, la segregación y la integración¹⁸”.



¹⁸ Ibidem. Parágrafo 4.

La educación inclusiva es el medio de hacer efectivo el derecho universal a la educación para las personas con discapacidad.

Enfoque



Exclusión

Características



"[S]e mantiene apartado a un estudiante de la escuela debido a la existencia de una deficiencia, sin que se le ofrezca otra opción educativa en pie de igualdad con los demás estudiantes."¹⁹

"[S]e impide que el estudiante con discapacidad se incorpore al sistema de enseñanza en razón de su edad, de su nivel de desarrollo o de un diagnóstico y se le coloca en un entorno de asistencia social o sanitaria, sin acceso a la educación."²⁰

Ejemplos

De acuerdo con el último Censo 2010, el 28% de los/as niños/as con discapacidad de 3 a 5 años y el 35% de las y los jóvenes con discapacidad de entre 15 y 19 años no van al colegio.

Enfoque



Segregación

Características

"La segregación tiene lugar cuando un estudiante con [discapacidad] (...) es remitido a un centro educativo diseñado específicamente para responder a una deficiencia concreta, normalmente en un sistema de enseñanza especial."²¹

Ejemplos

Resolución 1269/11 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires: "Las escuelas y los Centros de Educación Especial se organizan de acuerdo con las características de la matrícula atendida"²² y comprenden las "Escuelas de la Modalidad para Alumnos con Discapacidad Auditiva, Alumnos con Discapacidad Visual, Alumnos con Discapacidad Motora, Alumnos impedidos de concurrir al servicio educativo, Alumnos con Trastornos Emocionales Severos, Alumnos con Discapacidad Intelectual, Alumnos con Trastornos Específicos del lenguaje."²³



Integración

Características

Se promueve la escolarización de los/as niños y niñas con discapacidad en las escuelas comunes, siempre que estén en condiciones de adaptarse a sus métodos de enseñanza y organización educativa.

Ejemplos

Resolución N° 155/11 del Consejo Federal de Educación: "La integración escolar (...) es una estrategia educativa que tiende a la inclusión de los/as alumnos/as con discapacidad, siempre que sea posible, en la escuela de educación común, con las configuraciones de apoyo necesarias. En aquellos casos en que la complejidad de la problemática de los/as alumnos/as con discapacidad requiera que su trayectoria escolar se desarrolle en el ámbito de la escuela especial, se diversificará el currículum para acceder a los contenidos escolares, con los apoyos personales y las configuraciones de apoyo necesarias."²⁴



21. Ibidem. 22. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Resolución N° 1269/11. Disponible en <http://bit.ly/1vwfuwl>

23. Ibidem. 24. Consejo Federal de Educación. Resolución N° 155/11. 13 de octubre de 2011. Disponible en <http://bit.ly/1qnT4rx>

En este contexto, “el enfoque de la educación inclusiva ha surgido en respuesta a estos enfoques discriminatorios”²⁵.

¿Cuáles son los rasgos fundamentales del “enfoque de la educación inclusiva”?

Rosa Blanco explica que el enfoque de la educación inclusiva:

a) *“Implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad”*²⁶

Quienes conforman un sistema educativo inclusivo entienden que “la atención a la diversidad es una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto que requiere necesariamente avanzar desde enfoques homogéneos, en los que se ofrece lo mismo a todos, a modelos educativos que consideren la diversidad de necesidades, capacidades e identidades de forma que la educación sea pertinente para todas las personas y no sólo para determinados grupos de la sociedad”²⁷.

b) *“Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes para acceder y permanecer en la escuela, participar y aprender”*²⁸

El término “barreras” engloba a todas aquellas creencias y actitudes de quienes se encuentran involucrados en el proceso educativo. Estas creencias y actitudes se ven reflejadas en las culturas y las prácticas propias del sistema educativo; culturas y prácticas que, dadas las características personales, sociales o culturales de determinados alumnos, dan lugar a situaciones de exclusión, marginación o fracaso escolar²⁹.

c) *“Es un proceso que nunca está acabado del todo porque implica un cambio profundo de los sistemas educativos y de la cultura escolar”*³⁰

La educación inclusiva no debe ser considerada una meta del sistema educativo, sino que debe ser percibida como un proceso continuo orientado a que las escuelas valoren, aborden y respondan a la diversidad de necesidades, intereses y características de todos los alumnos³¹. En otras palabras, el proceso de inclusión educativa debe estar orientado a asegurar la presencia, la participación y el éxito de la totalidad de las y los estudiantes³².

25. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Parágrafo 4.

26. Rosa Blanco Guijarro. Marco conceptual sobre educación inclusiva, en “La educación inclusiva: el camino hacia el futuro”. ED/BIE/CONFINTED 48/Inf.2. Disponible en <http://bit.ly/1vEFmCj>. Página 8.

27. Ibidem.

28. Ibidem.

29. Ver Echeita, Echeita, Gerardo y Ainscow, Mel. “La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente”. Disponible en <http://bit.ly/1sheace>. Página 5.

30. Rosa Blanco Guijarro. Marco conceptual sobre educación inclusiva. Página 9.

31. Ver UNESCO. “Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All”. 2005. Disponible en <http://bit.ly/1vEFIT0>.

32. Ver Echeita, Gerardo y Ainscow, Mel. “La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente”. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – Argentina”.

34. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Parágrafo 28.

Entonces,

a) integración ¿es sinónimo de inclusión?

No. Ambos conceptos no deben ser confundidos y no deben ser usados como sinónimos.

El principio de integración educativa promueve la escolarización de los/as niños y niñas con discapacidad en las escuelas comunes, siempre que estén en condiciones de adaptarse a los métodos de enseñanza y organización educativa de las escuelas comunes.

Por el contrario, el principio de inclusión educativa promueve la reestructuración del sistema de educación común, de modo tal de lograr que todas las escuelas estén en condiciones de recibir a la totalidad de las y los estudiantes en sus aulas, incluyendo a las personas con discapacidad, y reconocer, aprovechar y valorar sus diferencias.

b) Las escuelas de educación especial ¿responden al “enfoque de la educación inclusiva?”

No. Las escuelas de educación especial responden al enfoque de la segregación. En consecuencia, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instó al Estado argentino a que tome “las medidas necesarias para que los estudiantes con discapacidad inscritos en escuelas especiales se incorporen a las escuelas inclusivas y a ofrecer ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general”³³.

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: las escuelas especiales como espacios segregados que deben ser transformados en escuelas inclusivas

“Al Comité le preocupan los bajos índices de niños y niñas con discapacidad inscritos en las escuelas (menos del 1%), y que **éstas sean en su mayoría escuelas de educación especial**, y el uso persistente de terminología que refleja el modelo médico de la discapacidad para la clasificación de los niveles de educación (...). El Comité **insta al Estado parte a que modifique la terminología educativa que refleja el modelo médico y oriente a la vez que promueva la transición de la educación especial y segregada al modelo inclusivo.**”

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “Observaciones finales sobre el informe inicial del Paraguay, aprobadas por el Comité en su noveno período de sesiones (15 a 19 de abril de 2013)”, CRPD/C/PRY/CO/1, párrafos 57 y 58.

“El Comité (...) **lamenta que muchos estudiantes con discapacidad sigan asistiendo a centros educativos especiales.** También observa con preocupación que el Estado parte no ha adoptado medidas suficientes para **ofrecer en los centros de educación general** adaptaciones razonables a todos los estudiantes con discapacidad y para desarrollar y promover un sistema educativo inclusivo conforme a lo dispuesto en la Convención.”

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “Observaciones finales sobre el informe inicial de Hungría, aprobadas por el Comité en su octavo período de sesiones (17 a 28 de septiembre de 2012)”, CRPD/C/HUN/CO/1, párrafo 41.

Educación inclusiva ¿es sinónimo de educación de baja calidad?

No. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recordó que “[l]a adopción de un sistema educativo inclusivo no significa que la educación sea de calidad inferior; al contrario, la implantación de una educación de calidad es un elemento central de las medidas recomendadas”³⁴ para avanzar en el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva.

P *h* **r** **A**

Marco jurídico y políticas públicas en materia de educación de las personas con discapacidad en Argentina

¿Qué órgano del Estado está facultado para dictar normas que regulen la educación de las personas con discapacidad en Argentina?

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional³⁵, el Congreso de la Nación tiene la facultad de establecer los lineamientos básicos de la política educativa nacional.

¿Qué normas rigen la educación de las personas con discapacidad en Argentina?

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, en diciembre de 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Educación Nacional 26.206. La ley “regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender”³⁶ y fija las bases para el diseño e implementación de las políticas públicas en materia educativa por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

35. “Corresponde al Congreso (...) [s]ancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. Artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.

36. Ley de Educación Nacional 26.206. Artículo 1.

La Ley de Educación Nacional 26.206 ¿garantiza el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva?

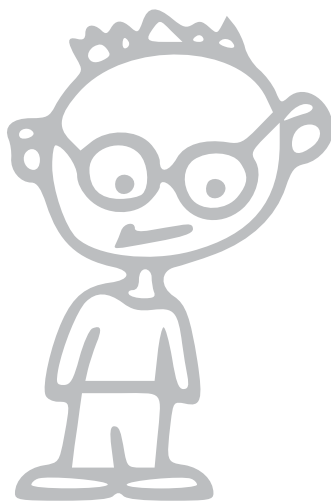
No. La Ley de Educación Nacional 26.206 **adopta el enfoque de la integración**. A la luz de esta norma, las autoridades educativas deben garantizar que las y los estudiantes con discapacidad que habitan en la Argentina asistan a una escuela común siempre y cuando estén en condiciones de adaptarse a esa escuela. Caso contrario, se dispondrá su escolarización en escuelas de educación especial³⁷.

Así, el artículo 42 de la Ley 26.206 establece que:

“La Educación Especial es **la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo**. La Educación Especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La Educación Especial **brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común**. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, **garantizará la integración** de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades **según las posibilidades** de cada persona.”

El artículo 42 de la Ley 26.206 ¿infringe la CDPD?³⁸

Sí. Esta disposición de la Ley de Educación Nacional viola el derecho a la educación inclusiva (artículo 24 de la CDPD) porque:



a) establece una Modalidad de Educación Especial “destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades”

Tal como señala Rosa Blanco, “[l]a larga tradición de concebir las diferencias desde criterios normativos, lo que falta o se distancia de lo “normal”, ha conducido a la creación de opciones segregadas para aquellos categorizados como diferentes. Desde la perspectiva de la educación inclusiva las diferencias son consustanciales a la naturaleza humana, cada niño es único e irrepetible, y se conciben como una oportunidad para enriquecer los procesos de aprendizaje, lo cual significa que deben formar parte de la educación para todos, y no ser objeto de modalidades o programas diferenciados”³⁹.

³⁷. En relación con este punto, ver Orlando, Magdalena. “Una mirada complementaria de la educación inclusiva en Argentina”. Página 12.

³⁸. Ver ibídem.

³⁹. Rosa Blanco Guijarro. Marco conceptual sobre educación inclusiva. Página 8.

b) Promueve la escolarización de personas con discapacidad en escuelas comunes siempre que sus “posibilidades” les permitan adaptarse a esas escuelas⁴⁰

De esta manera, siguiendo el enfoque de integración educativa, los y las estudiantes con discapacidad reciben una “aceptación” por parte de la escuela común donde se le permite aprender con estudiantes sin discapacidad. Sin embargo, la organización de la escuela ordinaria no es revisada y adecuada a las necesidades, intereses y rasgos propios de cada estudiante, incluyendo aquellos/as con discapacidad. Por el contrario, la persona con discapacidad es quien debe adaptarse a métodos de enseñanza y organización educativa que fueron desarrollados teniendo en cuenta las necesidades e intereses de estudiantes que entran en la categorización de “normales”.

Ejemplos de disposiciones provinciales que también lesionan el derecho a la educación inclusiva al promover la escolarización de personas con discapacidad en escuelas comunes “de acuerdo a sus posibilidades”:

- Artículo 39 de la Ley 13.688 de la Provincia de Buenos Aires: “La Dirección General de Cultura y Educación garantizará la integración de los alumnos y alumnas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los Niveles según las posibilidades de cada persona.”
- Artículo 49 de la Ley 9.870 de la provincia de Córdoba: “se asegura la integración de los alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. Asimismo, la escuela especial brinda atención educativa a todas aquellas personas cuyas problemáticas específicas no puedan ser abordadas por la escuela común.”

c) Promueve la escolarización de personas con discapacidad en escuelas especiales siempre que sus “posibilidades” o la “complejidad de su problemática” no les permitan adaptarse a las escuelas comunes⁴¹

En un sistema educativo inclusivo, la totalidad de las y los estudiantes aprenden en conjunto. Asimismo, una escuela inclusiva valora, aborda y responde a la diversidad de necesidades, intereses y características de la totalidad del alumnado, sin importar el grado de complejidad de sus problemáticas. En consecuencia, en un sistema educativo verdaderamente inclusivo, en ningún caso “la complejidad de la problemática de los/as alumnos/as con discapacidad” requiere que su trayectoria escolar se desarrolle en el ámbito de la escuela especial. Por el contrario, la totalidad de los y las estudiantes pueden *aprender conjuntamente en la misma escuela*, porque todas las instituciones están en condiciones de ofrecerles una educación inclusiva y de calidad a cada estudiante, sin importar cuáles sean sus necesidades educativas.

40. Ver Orlando, Magdalena. “Una mirada complementaria de la educación inclusiva en Argentina”. Página 12.

41. Ver Orlando, Magdalena. “Una mirada complementaria de la educación inclusiva en Argentina”. Página 12.

Ejemplos de disposiciones provinciales que también lesionan el derecho a la educación inclusiva al establecer una modalidad de educación especial:

- Artículo 39 de la Ley 13.688 de la Provincia de Buenos Aires: “La Educación Especial es la modalidad responsable de (...) brindarles [a los alumnos con discapacidad] atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas solamente por la educación común, y disponiendo propuestas pedagógicas complementarias.”
- Artículo 49 de la Ley 9.870 de la provincia de Córdoba: “la escuela especial brinda atención educativa a todas aquellas personas cuyas problemáticas específicas no puedan ser abordadas por la escuela común.”

d) No establece una norma que prohíba que las escuelas comunes rechacen la inscripción o discriminen a estudiantes por motivos de discapacidad

Tal como señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las leyes de educación deben contener “una cláusula explícita contra el rechazo en la que se prohíba la denegación de la admisión en la enseñanza general y se garantice la continuidad de la educación”⁴².

En términos más precisos, el Alto Comisionado enfatizó “[a] través de leyes de educación inclusiva, los Estados deben crear bajo los auspicios del respectivo Ministerio de Educación un sistema educativo inclusivo que prohíba el rechazo en las escuelas convencionales por motivos de discapacidad”⁴³.

*e) No promueve un proceso de transformación del sistema educativo orientado a lograr que todas las escuelas estén en condiciones de incluir a la totalidad del alumnado en sus aulas*⁴⁴

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas remarcó que “[l]a Convención [sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad] prevé la aplicación [del derecho a la educación inclusiva] en dos niveles: en primer lugar, asegurando la no discriminación de los estudiantes con discapacidad en las escuelas convencionales, y reforzando este derecho con ajustes razonables; en segundo lugar, mediante un cambio sistémico, que se realice progresivamente y que comprenda un plan de transformación para combatir la exclusión y la segregación. La aplicación eficaz se basa en un proceso complejo de cambio que precisa una transformación del marco legislativo y normativo existente y la participación plena de todos los interesados pertinentes, en especial de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.”

42. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Parágrafo 26.

43. Ibídem. Parágrafo 71.

44. Ver Orlando, Magdalena. “Una mirada complementaria de la educación inclusiva en Argentina”. Página 12.

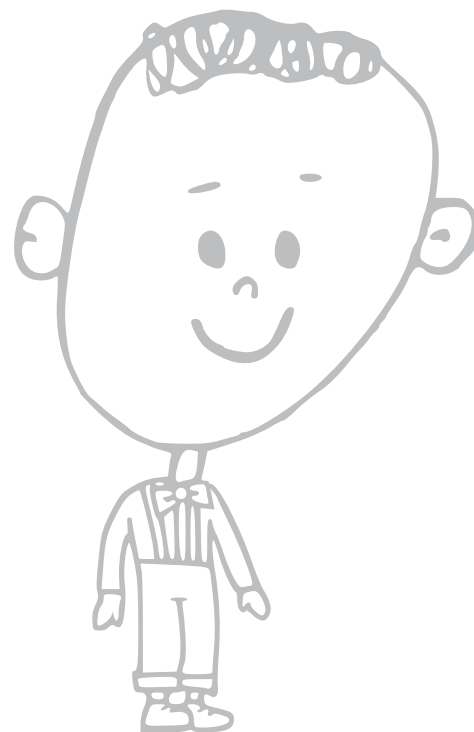
Esto así porque, de acuerdo al artículo 4 inciso 3 de la CDPD, al momento de elaborar y aplicar la legislación y las políticas públicas orientadas a hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva, las autoridades educativas nacionales y provinciales tienen el deber de “celebrar consultas estrechas y colaborar activamente” con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan⁴⁵.

Dado que el artículo 42 y otras disposiciones de la Ley de Educación Nacional 26.206 infringen la CDPD ¿pueden esgrimirse para infringir el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva?

No. Como ya señalamos, la CDPD tiene jerarquía suprallegal. En consecuencia, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan pueden exigir el pleno respeto de su derecho a la educación inclusiva sobre la base de las disposiciones de la CDPD, y en particular del artículo 24 de este tratado. Las autoridades educativas y los particulares no pueden alegar disposiciones de la Ley de Educación Nacional para desconocer o infringir ese derecho.

Las autoridades educativas argentinas y quienes conforman el sistema educativo ¿tienen la obligación de realizar ajustes razonables para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva?

Sí. De acuerdo al artículo 24 inciso 2.c) de la CDPD, el Estado argentino tiene la obligación de garantizar que “se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales”. El artículo 2 de la CDPD define a los ajustes razonables como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Asimismo, debe enfatizarse que la realización de ajustes razonables es “una medida contra la discriminación que debe aplicarse con efecto inmediato”⁴⁶ y la denegación de ajustes razonables constituye una forma de “discriminación por motivos de discapacidad” prohibida por la CDPD⁴⁷.



45. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Parágrafo 70.

46. Ibidem. Parágrafo 41.

47. Artículo 2 de la CDPD.

En el ámbito educativo, el propósito de la adopción de ajustes razonables “es garantizar que toda persona con discapacidad tenga acceso a la educación en el sistema existente en condiciones de igualdad con los demás”⁴⁸. En términos más precisos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha sostenido que “[l]os sistemas educativos inclusivos están diseñados para atender a una colectividad de estudiantes diversos; ahora bien, aun los sistemas educativos inclusivos más avanzados pueden presentar lagunas en su diseño debido a las necesidades específicas de los estudiantes. Ante esa situación, un sistema inclusivo debería revisar su práctica para determinar si es posible subsanar esas lagunas de forma sistémica o mediante ajustes razonables”⁴⁹.

Las autoridades educativas argentinas y quienes conforman el sistema educativo ¿deben garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los apoyos que necesitan para su formación efectiva en las escuelas comunes?

Sí. A la luz del artículo 24 inciso 2.c) y e), las autoridades educativas deben garantizar que “se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva” y “se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.”

Debe tenerse en cuenta que el tipo de apoyo requerido varía de persona a persona y no puede delimitarse de antemano y exhaustivamente. Así, desde una perspectiva respetuosa del derecho a la educación inclusiva, el tipo de apoyo debe definirse caso a caso, tomando en cuenta las necesidades, intereses y deseos de cada estudiante en particular y de las barreras presentes en el ámbito escolar que impiden u obstaculizan su inclusión educativa.

Las autoridades educativas argentinas y quienes conforman el sistema educativo ¿deben garantizar la accesibilidad de las escuelas comunes?

Sí. El artículo 9 de la CDPD dispone que, “los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas”⁵⁰.

48. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Parágrafo 41.

49. *Ibidem*. Parágrafo 42.

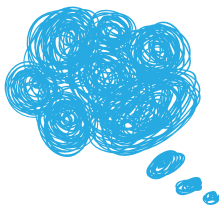
50. Énfasis agregado.

Tal como sostiene la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, “[a]segurar la accesibilidad significa adoptar suficientes medidas para que todos los estudiantes puedan participar de manera provechosa. La accesibilidad debería inspirar también el diseño de las políticas de educación. Si se respeta, conducirá progresivamente a la existencia de un mayor número de escuelas inclusivas”⁵¹.

Finalmente, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, “[l]a obligación de garantizar la accesibilidad debe ser un requisito legal y estar respaldada con una financiación suficiente”⁵².

Las barreras físicas y de comunicación ¿son los únicos “obstáculos y barreras de acceso” que impiden que los y las estudiantes con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación inclusiva?

No. Las barreras físicas y de comunicación no son los únicos obstáculos y barreras que las personas con discapacidad enfrentan al momento de ejercer su derecho a la educación inclusiva. Por el contrario, las barreras derivadas de las actitudes de docentes, demás estudiantes y familias también excluyen a las y los estudiantes del sistema educativo y lesionan su derecho a la educación inclusiva.



TESTIMONIO

“[L]a profesora me echó de la clase y me dijo que a ella no le pagaban doble por enseñar a retrasados. [...] Me dio mucha bronca. Pero la profesora es de matemática y yo no entiendo matemática, pero después esa profesora sacó carpeta y ahora tenemos otra profesora de matemática que es buena porque explica y ahora tengo 10. Tengo miedo de qué va a pasar cuando se le termine la carpeta a la otra profesora”.

Pilar Cobeñas, Buenas prácticas inclusivas en la educación de personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires y desafíos pendientes, Asociación por los Derechos Civiles, mayo 2014.

El estudio y la eliminación de esas barreras ¿son una condición necesaria para avanzar en el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva?

Sí. A la luz del derecho a la educación inclusiva, “las acciones han de estar dirigidas principalmente a eliminar las barreras físicas, personales e institucionales que limitan las oportunidades de aprendizaje y el pleno acceso y participación de todos en las actividades educativas”⁵³.

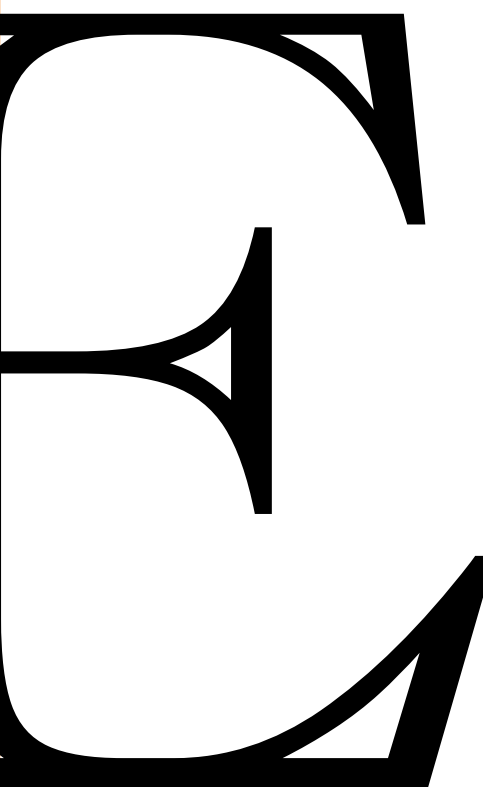
51. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Parágrafo 40.

52. Ibidem. Parágrafo 39

53. Blanco Guijarro Rosa. Marco conceptual sobre educación inclusiva. Página 9.

Lo p

I



El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su evaluación del cumplimiento por parte del Estado argentino de su obligación de garantizar el derecho a la Educación Inclusiva

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ¿ha evaluado si el marco normativo y las políticas públicas educativas argentinas garantizan el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva?

Sí. En septiembre de 2012, en sus Observaciones finales al informe presentado por Argentina en virtud del artículo 35 de la CDPD, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló:

“El Comité toma nota de que el marco legislativo que regula la educación en el Estado parte contiene de manera expresa el principio de la educación inclusiva (artículo 11 de la Ley N° 26.206). Sin embargo, observa con preocupación que la implementación de este principio se ve limitada, en la práctica, por la falta de adecuación de los programas y planes de estudio a las características de los educandos con discapacidad, así como por la prevalencia de

barreras de todo tipo que impiden que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en condiciones de igualdad y no discriminación con el resto de estudiantes. El Comité expresa su gran preocupación por el elevado número de niños y niñas con discapacidad atendidos en escuelas especiales y por la ausencia de centros de recursos educativos que apoyen la inclusión efectiva de los estudiantes con discapacidad⁵⁴.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ¿ha hecho recomendaciones al Estado argentino en relación con las medidas que debe adoptar para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva?

Sí. En septiembre de 2012, en sus Observaciones finales al informe presentado por Argentina en virtud del artículo 35 de la CDPD, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló:

“El Comité recomienda al Estado parte que desarrolle una política pública de educación integral que garantice el derecho a la educación inclusiva y que asigne recursos presupuestarios suficientes para avanzar en el establecimiento de un sistema de educación incluyente de estudiantes con discapacidad. Igualmente, el Comité insta al Estado Parte a intensificar sus esfuerzos para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad en la edad obligatoria establecida por el Estado parte, prestando atención a las comunidades de los pueblos indígenas y a otras comunidades rurales. Asimismo, urge al Estado parte a tomar las medidas necesarias para que los estudiantes con discapacidad inscritos en escuelas especiales se incorporen a las escuelas inclusivas y a ofrecer ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general⁵⁵.”

Las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ¿son de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino?

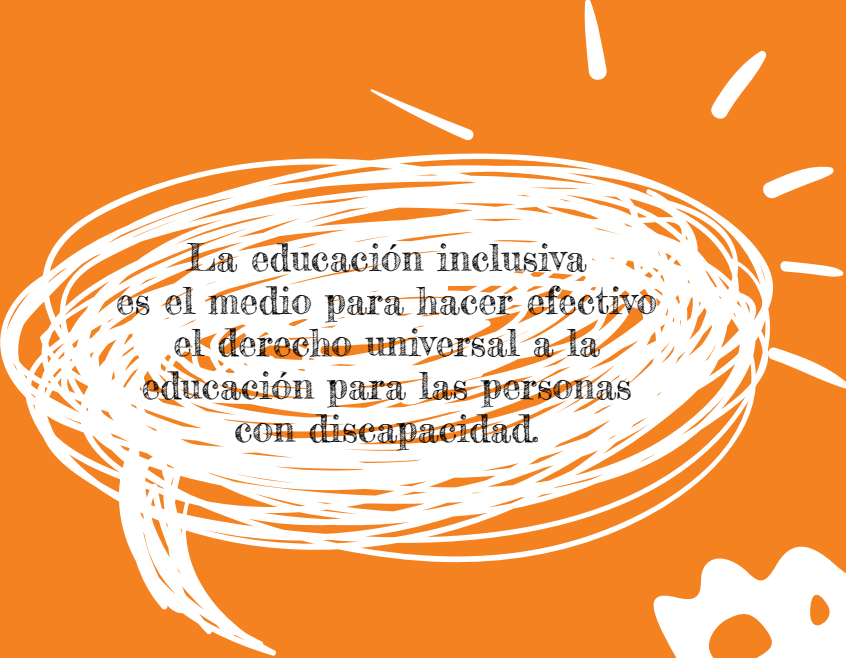
Sí. tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas oportunidades, “los pronunciamientos de distintos organismos internacionales, cuya jurisdicción el Estado Argentino ha aceptado a través de la suscripción de los tratados, pactos y convenciones que (...) integran el ordenamiento jurídico constitucional como ley suprema de la Nación (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional) (...) generan, ante un incumplimiento expreso, responsabilidades de índole internacional⁵⁶.”

A la luz de esta jurisprudencia, las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no deben considerarse meros comentarios o sugerencias que el Estado argentino tiene la potestad de seguir o rechazar. Por el contrario, el Estado argentino tiene la obligación internacional de dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

54. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – Argentina”. Octavo período de sesiones. 27 de septiembre de 2012. CRPD/C/ARG/CO/1. Disponible en <http://bit.ly/1s0iU4r>. Parágrafo 37.

55. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – Argentina”. Parágrafo 38.

56. Corte Suprema de Justicia de la Nación. “F. A. L. S/ medida autosatisfactiva”. F. 259. XLVI. Considerando 7.



La educación inclusiva
es el medio para hacer efectivo
el derecho universal a la
educación para las personas
con discapacidad.

Educación
inCLUsiva



z d

T

O

Obligaciones de las escuelas comunes

Introducción

Excusas habituales que alegan las escuelas comunes para negar la inscripción o la renovación de matrícula a estudiantes con discapacidad

“Esta escuela no está preparada para hacer inclusión (i.e. los docentes no están capacitados, la infraestructura no es adecuada, etc)”.

“Dada su discapacidad o su diagnóstico, el alumno estará más contenido y aprenderá mejor en una escuela especial, un espacio que le permitirá aprender con “sus pares” y no lo expondrá a situaciones de bullying”.

“No hay vacantes”.

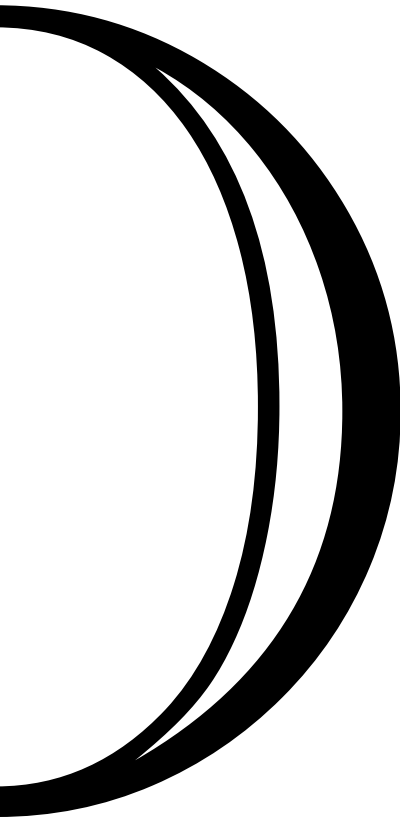
“Ya está cubierto el cupo de alumnos con discapacidad integrados”.

“Los cursos de esta escuela están superpoblados: hay demasiados alumnos como para integrar a un alumno con discapacidad”.

“Dada su discapacidad o su diagnóstico, el alumno es ineducable”.

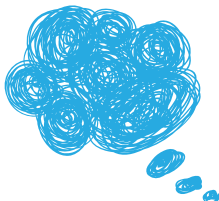
“La presencia de un alumno con discapacidad en el aula disminuirá la calidad de la educación que brinda la escuela y/o perjudicará el proceso de aprendizaje del resto de los alumnos”.

“Desde esta escuela ya no podemos hacer nada más por la educación del alumno. Ya agotamos todos los recursos a nuestra disposición para que aprenda y no podemos hacer nada más por él. Es mejor que continúe su educación en una escuela de educación especial”.



“La inclusión en la escuela común no es un derecho sino un capricho de padres que no aceptan la realidad de sus hijos”

“La inclusión no es viable en el nivel secundario: los contenidos se vuelven demasiado complejos e innecesarios para un alumno que, dada su discapacidad, no estará en condiciones de acceder a un empleo calificado y, por ende, no necesitará un título oficial de finalización del secundario”



TESTIMONIOS

“Alicia Kosinski recorrió 22 colegios antes de que Tomás, su hijo, fuera aceptado por uno. Vivió lo que define como un “calvario”. Semejante al de Gladys Isam, que consultó en diez establecimientos hasta que logró inscribir en preescolar al otro Tomás que ahora correteaba por la casa junto a su amigo. Juegan, saltan, se ríen mientras sus mamás le cuentan a Clarín que, de tanto sufrir, formaron una agrupación para asistir y contener a padres de chicos con síndrome de Down.

Alicia y Gladys peregrinaron para que sus hijos fueran aceptados por el sistema educativo. Chocaron contra excusas variadas. En colegios públicos y privados. Incluso religiosos, que no querían “chicos con Down” o “discapacitados mentales”. “Iba de la mano con Tomi y me decían que había vacantes, pero me preguntaban ‘¿para quién es?’ Yo les decía que era para él. ‘Ah, no, se cerró ayer la inscripción’, me decían. Como mamá, ¿cómo salís de ahí?”, lamenta Alicia. Denunció el caso ante el INADI y la Defensoría del Pueblo. No le dieron “bolilla”. Tomás cumple siete años a fin de mes. El año pasado pudo conseguir un colegio común e integrador para empezar el preescolar.

Gladys también sumó historias insólitas en su búsqueda. En una escuela privada llegaron a decirle que tenían lugares reservados para chicos que estaban aún en el vientre materno. O le planteaban el escollo de los cupos para chicos con determinadas problemáticas, lo que no está legislado. En otros directamente la rechazaban porque no había lugar. Pero cuando enviaba a una amiga le decían que sí tenían plazas disponibles.”

Diario Clarín. “Iba con Tomi y me decían que había vacantes, pero no para él”, 23 de julio de 2012. <http://clar.in/10ZvRpC>

Matriculación y permanencia en la escuela

Las personas con discapacidad ¿tienen derecho a aprender en escuelas comunes, junto a estudiantes sin discapacidad?

Sí. Tal como señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “[e]l derecho de las personas con discapacidad a ser instruidas en las escuelas convencionales figura en el artículo 24, párrafo 2 a), que establece que las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad”⁵⁷.

Las escuelas comunes públicas y privadas ¿pueden negarse a inscribir estudiantes o a renovarles la matrícula por motivos de discapacidad?

No, en ningún caso, sin excepción. De acuerdo al artículo 24, párrafo 2 a) de la CDPD, el Estado argentino debe garantizar que “[l]as personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad”.

A la luz de esta disposición, el Estado argentino debe garantizar que:

- “las escuelas convencionales no rechacen a alumnos por motivos de discapacidad”⁵⁸,
- “las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás alumnos”⁵⁹.

Las escuelas comunes públicas y privadas ¿pueden evaluar estudiantes con discapacidad para determinar si están en condiciones de asistir a esa escuela? Sobre la base de esa evaluación, ¿las autoridades educativas pueden determinar que estudiantes con discapacidad deben concurrir a una escuela especial?

No, en ningún caso, sin excepción. Tal como sostuvo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la luz del derecho a la educación inclusiva, “deben eliminarse las evaluaciones basadas en la discapacidad para asignar la escuela”⁶⁰.

Una escuela común pública o privada ¿puede rechazar la matriculación de estudiantes alegando que “no está preparada para hacer inclusión”?

No, en ningún caso, sin excepción. La afirmación “[e]sta escuela no puede aceptar al alumno porque no está preparada para hacer inclusión” es una de las excusas más frecuentes que alegan las escuelas a la hora de rechazar la inscripción de estudiantes con discapacidad. Frente a esta afirmación, es importante tener en cuenta que:

- a) Las y los estudiantes con discapacidad tienen derecho a la educación inclusiva en escuelas comunes de gestión pública o privada, de acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- b) El Estado tiene el deber de garantizar que las personas con discapacidad “no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad” (artículo 24, inciso 2.a, de la CDPD). Es decir, el Estado debe garantizar que las personas con discapacidad no sean excluidas de las escuelas comunes por el hecho de ser personas con discapacidad.

57. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Párrafo 26.

58. *Ibidem*. Párrafo 20.

59. *Ibidem*.

60. *Ibidem*. Párrafo 26.

- c) Las escuelas tienen el deber de hacer ajustes razonables para responder a las necesidades individuales de cada estudiante y poner a su disposición las medidas de apoyo personalizadas y efectivas que les permitan acceder a una educación de calidad (artículo 24, inciso 2. c, d y e de la CDPD).

¿Existe alguna norma o disposición que establezca que sólo puede haber una o un estudiante con discapacidad por aula?
No. No existe ninguna legislación que establezca que sólo puede haber una o un estudiante con discapacidad en cada una de las aulas comunes.

Sistemas de apoyo y ajustes razonables

*Las y los estudiantes con discapacidad ¿tienen derecho a seguir un “plan personalizado de enseñanza” en las escuelas comunes públicas y privadas?*⁶¹

Sí. En la actualidad, por regla, el proceso de aprendizaje de la totalidad de las y los estudiantes se estructura a partir de un plan de estudios común. Este plan de estudios es diseñado teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado considerado “normal” y establece contenidos, métodos de enseñanza y tiempos de aprendizaje comunes para la totalidad de las y los estudiantes. Por el contrario, una escuela inclusiva reconoce y valora la diversidad que existe entre sus estudiantes y, en consecuencia, adapta los planes de estudio, los tiempos de aprendizaje y los métodos de enseñanza a las necesidades, intereses y características de cada estudiante⁶². Así, “[l]a atención personalizada debería considerarse una característica central de la educación inclusiva”⁶³.

La adopción de programas pedagógicos individuales también impacta en la forma en que se mide el éxito de las y los estudiantes a la hora de aprender. Este impacto se percibe en dos aspectos fundamentales de la evaluación: los criterios de evaluación y los logros que se evalúan. Por un lado, en una escuela inclusiva, el rendimiento de los alumnos no se evalúa tomando como criterio un grupo normativo, sino los progresos individuales alcanzados por cada uno de los estudiantes⁶⁴. En cuanto a los logros que se evalúan, una escuela inclusiva no pone el foco exclusivamente en la enseñanza de contenidos estrictamente académicos, o en el éxito o fracaso del alumnado a la hora de incorporar esos conocimientos. Por el contrario, los objetivos fundamentales de una escuela inclusiva son mejorar la calidad de vida de cada estudiante⁶⁵, y que la totalidad de las y los estudiantes se comprometan con un conjunto de valores vinculados a la equidad, el respeto por la diversidad y la libertad⁶⁶, entre otros. En ese marco, los planes personalizados de enseñanza “están

61. En relación con este punto, ver Orlando, Magdalena. “Una mirada complementaria de la educación inclusiva en Argentina.” Página 18.

62. Para un análisis detallado de este punto ver UNESCO. “Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All” y Palacios. “El modelo social de discapacidad”.

63. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Párrafo 46

64. Ver UNESCO. “Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All”.

65. Ver Verdugo Alonso, Miguel Ángel. “El cambio educativo desde una perspectiva de calidad de vida”, en Revista de Educación, número 349. Mayo-agosto 2009. Disponible en <http://bit.ly/1uradYa>. Páginas 23 a 43.

orientados a conseguir que cada alumno viva, estudie y actúe de forma autónoma, con la ayuda necesaria, teniendo en cuenta su capacidad”⁶⁷.

¿Existe alguna norma o disposición que establezca que el personal de las escuelas especiales es siempre el responsable de brindar los apoyos que requieran las y los estudiantes con discapacidad que asisten a una escuela común pública o privada?

No. Las y los estudiantes con discapacidad pueden estar escolarizados en una escuela de educación común y aprender siguiendo un plan de enseñanza personalizado que contemple adaptaciones curriculares, sin que intervenga una escuela de educación especial o sus docentes. En otras palabras, en Argentina, gran cantidad de estudiantes con discapacidad asisten a escuelas comunes públicas y privadas y aprenden siguiendo un plan personalizado de enseñanza que es diseñado e implementado única y exclusivamente por las autoridades y docentes de la escuela común, sin la asistencia o participación de una escuela especial.

¿Existe alguna normativa que establezca límites a la cantidad de días y horas en las que las y los estudiantes pueden contar con la asistencia de una maestra integradora?

No. No existe ninguna norma que establezca límites a la cantidad de días y horas en las que las y los estudiantes pueden contar con la asistencia de una maestra integradora.

Asimismo, toda norma que estableciera esa clase de límites sería contraria al derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva, el cuál comprende el derecho a acceder a los apoyos que necesite para su formación efectiva en las escuelas comunes (artículo 24 inciso 2.c) y e).

Cualquier docente ¿puede negarse a enseñar a estudiantes por el hecho de que es un niño, niña o joven con discapacidad o alegando que su formación docente no es adecuada?

No, en ningún caso, sin excepción. Si cualquier docente se niega a enseñar a estudiantes por el hecho de que es un niño, niña o joven con discapacidad o alegando que su formación docente no es adecuada, su conducta constituye una forma de “discriminación por motivos de discapacidad”⁶⁸.

Las escuelas comunes públicas y privadas ¿tienen la obligación de permitir el ingreso de acompañantes o asistentes personales de las personas con discapacidad?

Sí. El apoyo de un acompañante o asistente personal representa una medida de apoyo personalizada a la que las personas con discapacidad tienen derecho, en virtud del artículo 24 inciso 2.c) y e) de la CDPD. La tarea del acompañante o asistente externo consiste en brindar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad los diferentes tipos de apoyo que puedan requerir a partir de su interrelación con el entorno escolar (escuela, docentes, grado, currícula, etc.)

66. Ver Andrés Rodrigo, María Dolores y Sarto Martín, María Pilar. “Escuela Inclusiva: Valores, Acogida y Convivencia”, en Sarto Martín, M^a Pilar; Venegas Renault, M^a Eugenia (Coordinadoras). Aspectos clave de la Educación Inclusiva. Publicaciones del INICO. Colección Investigación. Salamanca, 2009. Disponible en <http://bit.ly/1twP7nE>

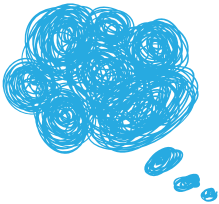
67. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Párrafo 47.

68. Artículo 2 de la CDPD.

Las autoridades de las escuelas comunes públicas y privadas ¿pueden impedir el ingreso a clase de estudiantes con discapacidad por el hecho de que no se encuentran acompañadas/os por su acompañante o asistente personal?

No. No existe ninguna norma que permita que las autoridades de un establecimiento educativo público o privado le impidan el ingreso a clases a estudiantes con discapacidad por el hecho de que su acompañante o asistente personal no se encuentra presente.

Evaluación y certificación



TESTIMONIO

“Alan tiene 20 años que cumplió el día 16 de octubre y terminó el año pasado en un colegio privado al que asistió desde salita de tres. Fue el primer alumno integrado en esa escuela. Por lo cual, desde ese entonces y hasta la actualidad la escuela está haciendo integración. Desde jardín hasta secundario hay chicos integrados con diferentes discapacidades gracias a la buena experiencia que han tenido, a pesar de que fue el primer niño integrado en ese colegio privado.

Él se recibió el año pasado con un boletín de 8,67 de promedio y con su currícula adaptada a los contenidos que él más necesitaba. La escuela orgullosamente le entregó un diploma y una medalla, y el colegio estuvo muy agradecido de haberlo podido disfrutar todos estos años en la escuela y por todo lo que pudieron enriquecerse con la experiencia de él los compañeros, los chicos de la escuela y los docentes. Fue hermoso. Lo triste fue que cuando los compañeros recibieron el título a él no se lo dieron. Entonces, la escuela fue a la DGEFP y la señora Beatriz Jáurequi, en presencia de él, me contestó que no se lo podía dar porque él tenía una discapacidad y que al tener una currícula adaptada no rindió al nivel de los compañeros. Por lo tanto, era imposible entregarle un título secundario a un joven que estuvo en la escuela, pero que no estudió lo mismo que sus compañeros, porque había cosas que eran muy difíciles de química y de otras materias que él no las había visto o lo vio con un contenido mucho más bajo que los compañeros. Entonces, no era justo para el resto darle un título a él cuando no tuvo el mismo nivel de estudio (...).

Nos fuimos por demás tristes y la realidad es que las escuelas hacen... Hay muchos colegios que cierran las puertas, pero los que las abren ahora están pensando en cerrar las puertas, porque cuando los chicos terminan y llegan como Alan a quinto año con su grupo de compañeros que fue desde los tres años, no se llevó una materia y se esforzó, estudió y todo lo que él pudo lograr y cuando termina el secundario le dicen “Chau, gracias”. Ponen a la escuela en una situación que tampoco es la que debe ser.”

Cámara de Senadores de la Nación, Versión Taquigráfica, Reunión de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, 21 de octubre de 2014, publicación de la Dirección General de Taquígrafos, disponible en www.senado.gov.ar.

La totalidad de las y los estudiantes, incluidos aquellos/as con discapacidad que estudian siguiendo un “plan personalizado de enseñanza” (también llamado “Proyecto Pedagógico Individual”), tienen derecho a obtener un título y/o certificado oficial en pie de igualdad con el resto⁶⁹.

Jurisprudencia

“La Justicia porteña condenó al Gobierno de la Ciudad a entregar el título secundario de bachiller a una estudiante a la que se lo negaron tras haber cursado con una currícula adaptada, al tiempo que consideró la medida como “arbitraria, contraria a derecho y violatoria de garantías constitucionales”.”

Télam, “Ordenan a la Ciudad a dar el título oficial a una joven con síndrome de down”, 19 de marzo de 2014, <http://bit.ly/1hDs6E>. La noticia incluye un link al texto del fallo.



69. Consejo de Derechos Humanos. Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Parágrafo 9.

ALGUNOS MATERIALES PARA SEGUIR LEYENDO

- Acuña, Carlos; BulitGoñi, Luis; Chudnovsky, Mariana y Repetto, Fabián. “Discapacidad: derechos y políticas públicas” en Acuña, Carlos; BulitGoñi, Luis (Comp.), *Políticas sobre la Discapacidad en la Argentina. El desafío de hacer realidad los derechos*. Editorial Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2010.
- Booth, Tony; Ainscow, Mel y otros. “Índice de Inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas”. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), Bristol, UK, 2000. Disponible en <http://bit.ly/1K2N2L8>
- Consejo de Derechos Humanos. “Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”. A/HRC/25/29. 18 de diciembre de 2013.
- Echeita, Gerardo y Ainscow, Mel. “La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente”. Disponible en <http://bit.ly/1sheace>
- Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Derecho a la Educación sin Discriminación. 2012. Disponible en <http://bit.ly/1AUxPHF>
- Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos. Manual para Parlamentarios sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. “De la exclusión a la igualdad. Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. Ginebra. OACDH. 2007.
- Orlando, Magdalena. “Una mirada complementaria de la educación inclusiva en Argentina”. 2013. Disponible en <http://bit.ly/1Act6kb>.
- Palacios, Agustina y Bariffi, Francisco. “La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Cinca, Madrid, 2007.
- Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Ediciones Cinca, Madrid, octubre de 2008.
- UNESCO. “Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All”. 2005. Disponible en <http://bit.ly/1O1Zjxc>
- Verdugo Alonso, Miguel Ángel. “El cambio educativo desde una perspectiva de calidad de vida”, en Revista de Educación, número 349. Mayo-agosto 2009. Disponible en <http://bit.ly/1uradYa>

DATOS ÚTILES

Si necesitas asesoramiento u orientación para ejercer tu derecho o el derecho de tus hijas/os a la educación inclusiva, podés ponerte en contacto con estas organizaciones ⁷⁰ :

Asociación Azul

Dirección: Calle 10 N° 977 piso 1, La Plata

Teléfono: 0221- 4831914

E-mail: info@asociacionazul.org.ar

Página web: www.asociacionazul.org.ar

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia- ACIJ

Programa Igualdad Educativa

Dirección: Av. de Mayo 1161, Piso 5, Oficina 9, Ciudad de Buenos Aires

Teléfono de contacto: 4381-2371

E-mail: igualdadeducativa@acij.org.ar

Página web: www.acij.org.ar

Asociación por los Derechos Civiles- ADC

Área de Derechos Sociales

Dirección: Av. Córdoba 795, Piso 8, oficinas 15 o 16, Ciudad de Buenos Aires

Teléfono de contacto: 5236- 0555

E-mail: derechossociales@adc.org.ar

Página web: www.adc.org.ar / www.educacion-inclusiva.com.ar

Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad- REDI

Av. Cabildo 2720, Piso 5to. y 6to, Dpto. “D”, C. de Buenos Aires

011- 4981-1428

E-mail: info@redi.org.ar

Página web: www.redi.org.ar

Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva

E-mail: info@grupoart24.org

Página web: www.grupoart24.org

70. El contenido de este informe es exclusiva responsabilidad de la Asociación por los Derechos Civiles. Las organizaciones mencionadas no estuvieron directa o indirectamente involucradas en la elaboración de este documento. Sólo se enuncian sus datos de contacto en caso de que alguna persona desee contactarse con ellas a fin de realizar una consulta sobre la temática.



Anexo

En esta sección se brindará información útil para las familias que deseen llevar adelante los siguientes trámites:

1) En caso de que se quiera solicitar la autorización de ingreso del Acompañante Personal No Docente (APND) de alumnos/as con discapacidad en escuelas comunes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (según Resolución N° 3034/MEGC/13):

Lugar para realizar la presentación: Dirección de la Escuela donde está matriculado el/la alumno/a.

Personas autorizadas a iniciar el trámite: el o los padres o el representante legal del/la alumno/a.

Forma: Mediante solicitud por escrito que deberá contener el requerimiento de ingreso del APND y la conformidad para que el APND desarrolle sus funciones. Todo debe presentarse en original con dos copias.

Documentación que debe presentarse:

- a) Certificado de Discapacidad del/la alumno/a. Para más información, consultar en <http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/certificado-de-discapacidad>
- b) Informes de los profesionales que tratan al/la alumno/a del que surja información sobre su desarrollo, necesidades y posibilidades;
- c) Informar nombres, apellidos y matrículas de los profesionales que supervisarán y coordinarán la actuación del APND;
- d) Documento Nacional de Identidad del APND;
- e) Copia Certificada del título profesional del APND, según las necesidades del/de la alumno/a.
- f) Póliza de Seguro a nombre del APND por accidentes personales y responsabilidad civil, comprensiva, por daños a terceros, por un monto de \$ 250.000;
- g) Certificado de Reincidencia del APND. Para obtener información sobre el modo de obtenerlo, ingresar a <http://www.dnrec.jus.gov.ar>
- h) Si el APND es una persona extranjera, acreditar que reside en el país en forma legal y que está autorizado para trabajar. Para más información, consultar en <http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?certificaciones>

Desarrollo

El desarrollo del trámite de autorización de ingreso se cumplirá en un **plazo no mayor a los 14 días**, distribuidos del siguiente modo:

- Dentro de los cinco **(5) días hábiles** subsiguientes a la recepción de la solicitud, la Dirección de la Escuela debe:
 - a) Controlar si la documentación presentada cumple los requisitos exigidos e informar a la familia cualquier faltante;
 - b) Remitir nota a los Equipos de Apoyo (EOE/ASE) para el seguimiento del alumno;
 - c) Elevar la solicitud a la Supervisión escolar que corresponda, remitiendo una de las copias de la documentación presentada.
- Luego, la Supervisión del Nivel y el Equipo de Apoyo (EOE/ASE), en un plazo que no puede ser mayor de **cinco (5) días** de recibida la documentación enviada por la Dirección de la Escuela, establecerán si consideran necesarios apoyos para organizar la trayectoria escolar del alumno, según Disposición 32/DGEGE/09 y 39/DGEGE/09.
- Dentro de los **dos días hábiles siguientes a la recepción de la documentación**, la Supervisión escolar emitirá su decisión sobre el ingreso del APND.
- Emitida la decisión, dentro de los **dos días hábiles siguientes**, la Supervisión notificará a la Dirección de la Escuela y a la familia del/la alumno/a.
- Finalmente, la Dirección de la Escuela labrará un acta en la que el APND deja constancia de que toma conocimiento de la resolución emitida. El acta será firmada, en la Escuela, por la conducción de la Escuela, la familia del/la alumno/a y el equipo que supervisa o coordina la actuación del APND.

Preguntas frecuentes

- **¿Esta resolución se aplica a alumnos/as con algún tipo de discapacidad específica?**

No. Todo alumno/a con discapacidad, que tenga certificado y que lo requiera, puede solicitar un APND.

- **¿Qué profesión debe tener el APND?**

La profesión del APND dependerá de **los requerimientos de apoyo** del/la alumno/a. Han sido derogadas las disposiciones de la Res. 3773/2011 que establecían que sólo podían desempeñarse como APND los profesores de educación especial, psicólogos y/o psicopedagogos.

- **¿Qué significa que la Supervisión del Nivel y el Equipo de Apoyo acordarán –si lo consideran pertinente- los apoyos necesarios para el/la alumno/a de acuerdo con la Disposición 32/39/09?**

La referida Disposición fue dictada con el fin de unificar y ordenar los procedimientos para hacer posible la inclusión de niños, niñas y jóvenes **con discapacidad**. Allí se establecen los procedimientos que deben seguir los Equipos de Apoyo (EOE/ASE) y, en su caso, los Gabinetes Centrales, para definir configuraciones de apoyo. Por eso, en caso de ser considerado necesario, esas configuraciones de apoyo deben ser resueltas en el plazo de 5 (cinco) días.

La Disposición Nº 32/39 establece, en su artículo 6, que sólo podrá recomendarse el pase a una escuela dependiente de la Dirección de Educación Especial cuando se haya constatado “que el niño/a o joven haya recibido apoyo previo de los recursos de la DEE u orientación del EOE, sin que los procesos y resultados varíaran.” **Esta disposición opera tanto si se solicita el ingreso de APND como si no.**

- **¿En algún caso el procedimiento de autorización de ingreso del APND puede impedir el ingreso del/la alumno/a a la escuela?**

No. Según el punto 3 del Anexo de la Resolución Nº 3034/2013, el/la alumno debe ser incluido/a en la escuela común **independiente del trámite de ingreso del APND**. El punto 4 dispone que la inscripción del/la alumno/a se hará en la forma habitual, y que el trámite de autorización de ingreso del APND seguirá en forma paralela e independientemente del ingreso del/la alumno/a.

Importante:

El/ la alumno/a deberá continuar incluido/a en la escuela común independientemente de la tramitación de la autorización del ingreso del APND.

En los casos en los que se solicite una vacante para un/a niño/a o adolescente que debe ingresar con un APND, la Dirección de la Escuela debe otorgar la vacante, respetando las prioridades de ingreso reglamentarias, y en forma paralela dará trámite a la autorización del ingreso del APND.

2) En caso de que se quiera solicitar la autorización de ingreso del Acompañante/Asistente externo de alumnos/as con discapacidad en escuelas comunes de la Provincia de Buenos Aires (según Resolución N° 782/DGCYE/13):

Lugar para realizar la presentación: Dirección de la Escuela donde está matriculado el/la alumno/a.

Personas autorizadas a iniciar el trámite: la familia del/la alumno/a, una escuela, alguna autoridad judicial, alguna institución privada, la obra social o alguna organización social vinculada a la atención del/la alumno/a.

Documentación que debe presentarse:

Del alumno:

- a) Los informes pedagógicos de equipos docentes: directivos, equipos técnico-docentes (equipo de orientación escolar) y maestros de la escuela o de otras escuelas cuando provenga de otra institución o haya estado escolarizado con anterioridad.
- b) Los informes profesionales específicos, rubricados por los profesionales intervinientes y/o avalados por las instituciones de pertenencia, que fundamentan la necesidad de un acompañante.

Del acompañante externo:

- a) El curriculum profesional: títulos y formación específica que habilita su intervención profesional como acompañante. Se deberá adjuntar fotocopias de títulos o certificados de estudio.
- b) El aval institucional que su intervención requiere: descripción del equipo interdisciplinario externo que sostiene y supervisa su tarea. El acompañante debe informar por escrito cuál es el profesional que supervisa su intervención.
- c) La constancia de habilitación que avale su idoneidad para la intervención profesional y vigencia del seguro que cubre su actividad laboral (ART y responsabilidad civil).

De la institución externa:

- a) Fotocopia simple de la Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, firmada por el/la directora/a responsable o representante legal.
- b) Fotocopia autenticada de la habilitación otorgada por la autoridad sanitaria jurisdiccional. Las obras sociales o prepagas también son instituciones habilitadas para cubrir la prestación.

Contrariamente a lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, **y aun cuando lesione el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva**, la Provincia de Buenos Aires, por medio de la citada Resolución N° 782/13, estipula ciertos requisitos para el ingreso de acompañantes/asistentes externos en las escuelas.

Los/as acompañantes/asistentes externos/as deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Pertenecer a una institución habilitada para tal efecto. Es obligación de las obras sociales o prepagas que deseen contratar algún servicio con los prestados inscriptos verificar que los requisitos exigidos se encuentren en vigencia.
- b) Contar con el apoyo de técnicos interdisciplinarios. Excepcionalmente se podrá aceptar que el/la acompañante/asistente externo/a actúe con la supervisión de otro/a profesional externo/a. En este caso, el/la acompañante debe informar por escrito cuál es el profesional que supervisa su intervención.
- c) Cumplir con la habilitación profesional y el régimen laboral correspondiente. Dicho control está a cargo de la institución a la que pertenece y/o avala su intervención.
- d) Adherir al o a los proyectos institucional/es de la o las escuelas.

Importante:

Según establece la Resolución de la Provincia de Buenos Aires, al finalizar el ciclo lectivo se analiza la evolución del/la alumno/a y se evalúa el trabajo realizado por el/la acompañante/asistente externo/a. Luego, se decide si es necesaria la continuidad del apoyo para el año siguiente.

En caso de que se decida que es necesario que el/la alumno/a continúe su escolaridad con el apoyo del/la acompañante, se dejará constancia de que al iniciarse el nuevo ciclo lectivo se deberán presentar nuevamente los informes y/o estudios actualizados que demuestren la situación del niño, niña o joven con discapacidad.

3) En caso de que se quiera realizar un reclamo ante la falta de cobertura por discapacidad por parte de alguna obra social ante la Superintendencia de Servicios de Salud:

Personas autorizadas a iniciar el trámite: Es un trámite personal. También puede realizarlo una persona autorizada con nota del titular.

Documentación que debe presentarse:

- a) DNI del titular y/o del beneficiario con discapacidad.
- b) Certificado de Discapacidad.
- c) Último recibo de sueldo o haber jubilatorio / Últimos pagos de monotributo y/o servicio doméstico; cuota adherente y/o superador.
- d) Credencial de la Obra Social o Prepaga.
- e) Diagnóstico médico.
- f) Prescripción actualizada de la prestación a solicitar por el médico tratante de la Obra Social.

Para más información, consultar en

http://www.sssalud.gov.ar/archivos/tramites/Falta_de_Cobertura_Discapacidad.pdf

4) Solicitud ante la Obra Social

Es imprescindible presentar:

- a) Orden del médico.
- b) Nota indicando la prestación que se solicita.

Es importante siempre hacer sellar una copia para tener un comprobante de la entrega.

Modelo de nota

Lugar y Fecha

Sres.

Presente

Referencia: Consentimiento de Prestaciones de Discapacidad

Por la presente doy consentimiento al plan de tratamiento que se brinda a mi

..... bajo la modalidad

(nombre y apellido del afiliado para el que se solicita la prestación) (Kinesiología, psicología, transporte, CET, etc.)

Asimismo, acepto la gestión a realizar por la obra social ante la Superintendencia de Servicios de Salud según Resolución 1511/2012/SSSalud, comprometiéndome a cumplimentar todos los requisitos necesarios para ese trámite.

Firma del afiliado titular:

Aclaración:

DNI:

Nº de afiliado:

CUIL:

Teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Firma del Prestador:

Aclaración:

DNI:

Acta 333 del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, presidido por CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad)

En enero de 2015 el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, presidido por CONADIS, en su carácter de organismo regulador del "Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (art. 1, Decreto 1193/98), emitió el **Acta 333** para indicar que la **figura de Maestro de Apoyo a la Integración Escolar debe ser adecuada a los requerimientos de apoyo de las personas beneficiarias del sistema.**

Dicha Acta establece, en su parte pertinente, que: *"Los apoyos pueden adoptar distintas formas según el requerimiento del estudiante y/o la comunidad educativa. Los pueden brindar los docentes, profesores con conocimiento especializado, (docentes de educación especial), otros profesionales (psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, intérpretes de lengua de señas, entre otros) y/o asistentes personales."*

En caso de que la obra social o prepaga rechace la solicitud de cobertura de la prestación MAESTRO DE APOYO y/o exija títulos específicos, se puede presentar esta Acta emitida por el Directorio del Sistema de Prestaciones.

Acceda al Acta en: <http://bit.ly/1QvrgkG>

